



Al contestar cite Radicado 2025-2-003200-008954 Id: 510893
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 17:50:56
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL DEL
INTERIOR
Destinatario: UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE
PAZ

Bogotá D.C.

Doctora

GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA

Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

implementacion@presidencia.gov.co

Ciudad

Asunto: Remisión por competencia citación a debate de control político, proposición No. 5 relacionada con el plan de choque de implementación del Acuerdo de Paz.

Respetada Directora, reciba un cordial saludo.

De manera atenta, me permito informar que se recibió en este Ministerio el oficio citado en el asunto, por medio del cual se cita a debate de control político a esta Cartera y a otros Ministerios y entidades del orden nacional, para tratar el tema relacionado con el plan de choque de implementación del acuerdo de paz. La proposición se encuentra suscrita por el Honorable Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz. Al revisar el cuestionario existen asuntos que son del resorte de la entidad a su cargo, concretamente los siguientes:

10. ¿Cuántos y cuáles Actos Legislativos, Leyes, Decretos y Resoluciones hacen falta para lograr la implementación del Acuerdo Final de Paz?

11. ¿Qué instrumentos normativos se hace necesario ampliar para la implementación del Acuerdo Final de Paz y para la transformación territorial?

12. ¿Cómo se busca superar la desarticulación institucional para lograr la implementación del Acuerdo Final de Paz?

13. ¿Cómo se pretende devolver el estatus político y la importancia estratégica al SISEP?

25. ¿Ya se creó la Comisión para agilizar la implementación del Acuerdo Final de Paz? ¿quiénes la integran? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? ¿qué temas va a trabajar la Comisión?

26. En qué consiste el tablero de control para el seguimiento y control de la ejecución del Plan de Choque? Sírvase indicar su contenido y responsables.

27. ¿Con qué otras entidades se articularán para la ejecución del Plan de Choque?

Así las cosas, se remiten por competencia los mencionados interrogantes, de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, en concordancia con el artículo 258 de la Ley 5 de 1992.

Cordialmente,



ANDERSON GUERRERO TRUJILLO
Director Técnico

Dirección de Asuntos Legislativos
Despacho del Viceministro General del Interior

Proyectó: Juan Camilo García – Contratista DAL
Revisó: María Lucía Cruz – Contratista DAL



Al contestar cite Radicado 2025-2-003200-008954 Id: 510893
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 17:50:56
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL DEL
INTERIOR
Destinatario: UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE
PAZ

OFI25-00057265 / GFPU 13170000

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2025

Doctor:

DANIEL RICARDO REYES PLATA

Secretario de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto

Cámara de Representantes

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Correo electrónico: comision.paz@camara.gov.co.

Ciudad



Clave:

RqNIKpQw0Z

Asunto: Respuesta al EXT25-00037905 y EXT25-00041404. Proposición nro. 5.
Comisión Legal de Paz y Posconflicto Cámara de Representantes.

Estimado Secretario:

Desde la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, hemos recibido por traslado del Ministerio del Interior y de la Consejería Comisionada de Paz, el cuestionario aprobado por la Comisión Legal de Paz y Posconflicto, en sesión del 26 de febrero de 2025, contentiva de la Proposición nro. 5 presentada por el HR. Alirio Uribe Muñoz.

Sea en primer lugar reafirmarle a la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes, el compromiso de esta Unidad con la implementación del Acuerdo Final de Paz y, en consecuencia, nuestro esfuerzo por aportar al avance de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional.

Ahora bien, en el marco de las competencias asignadas a esta Unidad mediante el artículo 24 del Decreto 2647 de 2022, consistentes en la asesoría, seguimiento y articulación interinstitucional en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, me permito dar respuesta al cuestionario remitido, en los siguientes términos:

10. ¿Cuántos y cuáles Actos Legislativos, Leyes, Decretos y Resoluciones hacen falta para lograr la implementación del Acuerdo Final de Paz?

Los compromisos normativos del Acuerdo Final de Paz señalados en los puntos 6.1.9 y 6.1.10 así como en el Plan Marco de Implementación (en adelante PMI), pendientes de incorporación en el ordenamiento jurídico colombiano a la fecha de presentación de este informe son los siguientes:

1. Programa de Protección Integral (A.P. 3.4.7 y DL. 895 de 2017): derivado del Decreto Ley 895 de 2017.
2. Garantías para la movilización y la protesta pacífica (A.P. 2.2.2) (PMI B.135).
3. Participación ciudadana. (A.P. 2.3.1/ 6.1.10) (PMI B. 129).
4. Reforma política (A.P. del 2.3.2 - 2.3.5 / 6.1.10) (PMI B.186/ B.187).
5. Financiamiento de partidos (A.P. 2.2 A.P. 6.1.10) (PMI B.162).
6. Fortalecimiento de Veedurías Ciudadanas (A.P. 2.2.5 /6.1.10) (PMI B.E.13/ B.152/ B.E.14 / B.G.2).
7. Inclusión de dos representantes (hombre y mujer) de los pueblos Rrom en el Consejo Nacional de Planeación (PMI B.E.25/B.E.3).
8. Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos (A.P. 2.1.2.2) (PMI B. 446).
9. Procedimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural (A.P. 1.1.8) (PMI A.11).
10. Tratamiento Penal Diferencial para Pequeños Cultivadores de Cultivos de Uso Ilícito (A.P. 4.1.3.4/ 6.1.9) (PMI D.MT.2, D.E.12, D.E.13, D.267).
11. Ley de tierras y adecuación de tierras (A.P. 6.1.10 literal a) (PMI A.E.5) (A.P. 1.3.1.2, A.P. 6.1.10) (PMI A.25/ A.25P).
12. Política Integral de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Reducción del Consumo de SPA (A.P. 4.2.1.1) (PMI. D.291, D.292, D.294, D.G.7 y D.E.9).
13. Plan Nacional Sectorial de Salud (A.P. 1.3) (PMI A. 456).
14. Modificación a la Ley 152 de 1994 (A.P. 2.2.6,6.1.1, 6.1.2, 6.1.9) (PMI B.158).
15. Programa especial de dotación de tierras en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras: Derivado de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 902 de 2017.
16. Proyecto de Decreto - Programa Especial de Armonización Indígena (A.P. 6.2.) (PMI C. E. 3).
17. Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad de la Resolución 1325 de 2000 de la Organización de Naciones Unidas.
18. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección derivado del Decreto Ley 895 de 2017.

11. Qué instrumentos normativos se hace necesario ampliar para la implementación del Acuerdo Final de Paz y para la transformación territorial?

Si se trata de ampliar la implementación del Acuerdo Final de Paz, en un primer momento se deben modificar los siguientes instrumentos normativos:

- Acto Legislativo 01 de 2016: El Gobierno nacional debe incluir el capítulo de paz de los Planes Plurianuales de Inversiones del PND al menos hasta el PND 2034-2038 (en 2036 se cumplirían los 20 años del Acto Legislativo 01 de 2016).
- Acto Legislativo 02 de 2017: por el cual el Gobierno nacional debe implementar el Acuerdo Final hasta agosto de 2030, último periodo presidencial de los 3 establecidos a partir de su firma.
- Decreto Ley 893 de 2017: Los PDET, tal como están previstos hoy, durarían como máximo hasta 2028 o 2029 si su duración se cuenta desde la entrada en vigencia de los PATR.
- CONPES 3932 de 2018: la adecuada implementación del Acuerdo Final - PDET incluidos- requiere de la incorporación del Plan Marco de Implementación en los Planes de Desarrollo 2018-2022, 2022-2026, 2026-2030 y 2030-2034 inclusive, en este último caso porque el PMI finaliza en 2031 y debe incluirse en el PND de ese último cuatrienio.

Otros instrumentos de planificación del Acuerdo Final de Paz, así como estrategias de intervención territorial deberán evaluarse una a una, en caso de modificarse las normas antes relacionadas.

12. ¿Cómo se busca superar la desarticulación institucional para lograr la implementación del Acuerdo Final de Paz?

En el marco de la adecuación institucional prevista para implementar lo acordado en el 2016 como eje fundamental de la política de Paz, se creó la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022).

Consideramos importante aclarar las funciones que corresponden a esta Unidad:

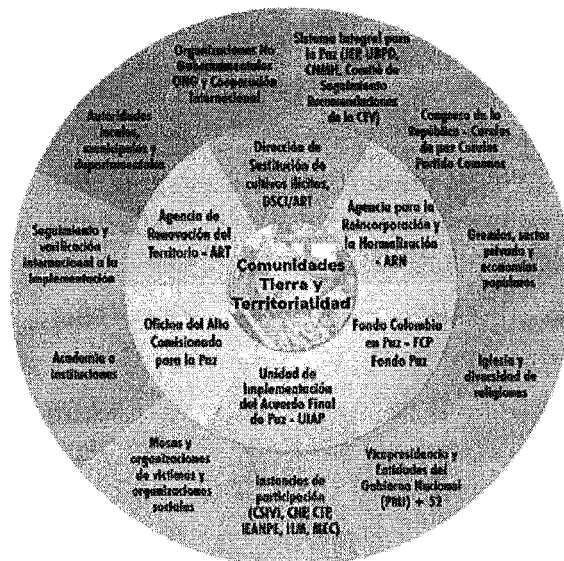
- Asesorar al Consejero Comisionado de Paz: Brindar apoyo en la formulación y conceptual para la implementación del Acuerdo Final de Paz.
- Coordinar las directrices: Garantizando el cumplimiento de las decisiones pactadas.
- Seguimiento al cumplimiento: Monitorear y evaluar.
- Apoyar la articulación: Facilitar el trabajo conjunto.
- Seguimiento a la implementación: Monitorear, supervisar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

Aclarado lo anterior, nos permitimos indicar en el presente informe las acciones llevadas a cabo en el proceso de articulación interinstitucional para la implementación de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz:

La Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, ubicada en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, trabaja en coordinación con entidades nacionales, autoridades locales, organizaciones internacionales, sociedad civil y movimiento social, con el fin de articular y viabilizar las acciones institucionales en las regiones priorizadas para la implementación integral de Acuerdo.

Así mismo, promovemos el encuentro y diálogo entre la institucionalidad de paz y las organizaciones y movimientos sociales, el sector privado, las economías populares y demás expresiones de la sociedad civil, fortaleciendo la veeduría, control social y la participación incidente (procesos de planeación, ejecución y seguimiento) en la construcción de paz territorial.

Ilustración 1. Mapa de articulación para la implementación del Acuerdo Final de Paz



Fuente: Elaboración propia UIAP.

En este sentido, con el fin de articular, coordinar, hacer seguimiento y verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz de manera integral, la Unidad de Implementación ha desarrollado diversas estrategias y acciones de coordinación por punto del Acuerdo, las cuales se detallan a continuación.

Estrategia Territorial:

Para el 2024-2025 se proyectó que, en el marco de las 8 regiones priorizadas en su Plan de Acción, la Unidad de Implementación liderara la conformación territorial de mesas de trabajo donde se encontrarán las entidades de orden

nacional y territorial que realizan acciones que derivan en la Implementación del Acuerdo Final de Paz. Estas mesas tienen por objetivo principal facilitar la coordinación y la articulación de las entidades implementadoras en los territorios junto con las entidades de orden departamental y municipal buscando la concurrencia de recursos financieros, técnicos y humanos, superar cuellos de botella y, permitir la construcción de redes de comunicación eficiente y el flujo de información mediante la construcción de planes de trabajo que requieran un impulso articulado para avanzar significativamente en la implementación del Acuerdo Final de Paz. En este sentido, para el año 2025 se continuarán desarrollando estas mesas de articulación en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Chocó, Antioquía, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Huila y Tolima.

Reforma Rural Integral (Punto 1 y 4)

La estrategia de impulso de la Reforma Rural Integral desde la Unidad parte de reconocer que las soluciones al problema de las drogas ilícitas hacen parte integral de la Reforma Rural Integral, y que por lo tanto los puntos 1 y 4 deben implementarse de manera coordinada y articuladas entre sí y con los demás puntos del Acuerdo en el marco de la integralidad de este. En ese sentido, se reportan las acciones diferenciadas por punto, sin embargo, son acciones que están articuladas y coordinadas entre sí al interior de la Unidad.

Desde la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz se priorizó el papel del lugar, la tierra, el territorio y la territorialidad en el impulso y apropiación social de los seis puntos del Acuerdo. De ahí que, durante el periodo 2022-2026 se ha trabajado en coordinación con entidades nacionales, autoridades locales, organizaciones internacionales, sociedad civil y movimientos sociales, para viabilizar acciones institucionales en las regiones priorizadas y así avanzar con una implementación integral. La estrategia diseñada al interior de la Unidad se enfoca en considerar las particularidades del territorio como centro de construcción de paz, promoviendo acciones que permitan el impulso de la paz territorial y ambiental; valorando el diálogo permanente con movimientos sociales, sector privado y sociedad civil para una implementación efectiva de lo acordado.

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

La Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha venido adelantando un proceso de actualizar y alinear las acciones, bajo la interacción territorio - nación - territorio, de los 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI) y sus respectivos planes de acción correspondiente a la vigencia 2024. En ese proceso, se conformó una

comisión de alto nivel técnico, mediante la cual se han preparado los lineamientos generales para que los PNRRRI guíen la acción de las entidades de forma coordinada y complementaria en los territorios, con el fin de lograr una acción territorial y presupuestal articulada que logre el objetivo de transformación territorial.

Este ejercicio, también se viene realizando en el marco del Sistema de Reforma Agraria y Desarrollo Rural liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como el esquema de gobernanza que impulsa el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final de Paz, y cuya agenda programática la constituyen los PNRRRI. En ese marco, la Unidad participó de manera activa y propositiva en la reglamentación y del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SNRADR) a través del Decreto 1406 de 2023, y hace parte de distintos subsistemas e instancias del SNRADR.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos de construcción y adopción de los 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integra, se logró el cierre técnico el Plan Nacional de Salud a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y en proceso de adopción mediante decreto. En ese marco, la Unidad articuló varios espacios de revisión técnica con el Ministerio, con el fin de lograr su pronta adopción.

Escenarios de coordinación institucional nacional y territorial de la RRI (Puntos 1 y 4)

La Unidad de Implementación ha constituido escenarios de coordinación para una acción institucional articulada, integral y complementaria para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Estas instancias de coordinación han sido instaladas y puestas en funcionamiento en las 8 subregiones priorizadas por el sector paz de la Presidencia de la República. De manera general, estas instancias son citadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz e incluyen a las agencias del sector paz de la Presidencia: Agencia de Renovación del Territorio (ART), Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).

Igualmente, en cada subregión se citan a otras entidades con compromisos en la Reforma Rural Integral y la implementación territorial del Acuerdo Final de Paz, de acuerdo con las dinámicas y problemáticas más presentes en cada subregión. De esta manera, se han vinculado también entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). A continuación, se detallan las entidades que participan en las mesas de coordinación de cada subregión:

Mesa de Coordinación Catatumbo:

- Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia para el Desarrollo Rural (ADR)
- Secretaría Ejecutiva Jurisdicción Especial de Paz (SE-JEP)
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (DSCI)

Mesa de Coordinación Guaviare:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas

Mesa de Coordinación Cauca:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
- Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Sociedad de Activos Especiales (SAE)
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas

Mesa de Coordinación Arauca:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)

- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Mesa de Coordinación Putumayo:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Mesa de Coordinación Pacífico Nariñense:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
- Jurisdicción Especial de Paz (JEP)
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Sociedad de Activos Especiales (SAE)
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
- Cámara de Comercio
- Defensoría del Pueblo
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas

Mesa de Coordinación Antioquia:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
- Sociedad de Activos Especiales (SAE)

- Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
- Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS)
- COLPENSIONES
- UNISOLIDARIA
- Ministerio de Interior
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Mesa de Coordinación Choco:

- Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP)
- Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)
- Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)
- Agencia Nacional de Tierras (ANT)
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
- Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS)
- Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
- Sociedad de Activos Especiales (SAE)
- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT)
- Misión de Verificación de las Naciones Unidas

Como principal avance de estas mesas de coordinación, ha sido la constitución de estas instancias en las 8 subregiones, y posterior construcción de un inventario de acciones y proyectos que desarrollan las entidades partes en los territorios, con el fin de generar acciones de articulación y coordinación. Con base en ese inventario se impulsa la construcción de planes de trabajo y cronogramas de acción.

En ese sentido, se han generado mesas de articulación en sobre la implementación territorial, que tiene su expresión por las agencias implementadoras, principalmente de las adscritas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de las vinculadas con el sector agricultura, toda vez que los compromisos derivados de los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz, se refieren específicamente a compromisos para la implementación y transformación territorial, de manera especial a los municipios más afectados por el conflicto armado. Dicho lineamiento de articulación para la implementación también se expresa en las subregiones, en el cual se han avanzado en la conformación de mesas de articulación y coordinación regionales.

Convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Por iniciativa de la Unidad de Implementación se construyó y firmó un convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el marco de impulsar el punto 1.1.9 sobre la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural del Acuerdo Final de Paz, de manera especial apuntando a realizar acciones afirmativas para las mujeres alrededor de la tierra, apoyar la formalización de tierras de las comunidad campesinas, apoyar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y fortalecer la línea base de la información catastral.

El Convenio Interadministrativo No. 011-23 DAPRE - No. 5488-23 IGAC fue firmado el 13 de septiembre de 2023 (ver Anexo 1), con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y administrativos de manera colaborativa, sinérgica y armónica, para el intercambio de información en el desarrollo de las funciones misionales. Para el desarrollo de este objeto se estableció un plazo de 4 años. A la fecha, este convenio ha logrado fortalecer que las entidades locales, funcionarios y organizaciones sociales puedan proponer acciones afirmativas de género en los predios rurales que tienen las mujeres. Adicionalmente, ha apoyado la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y fortalecido los procesos de promoción de Zonas de Reserva Campesina y formalización de tierras a familias campesinas y comunidades étnicas. En los meses que va de implementado el convenio, estos avances de han dado principalmente en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Urabá Antioqueño, Chocó, y Pacífico y Frontera Nariñense:

- En las subregiones del Bajo Cauca y Urabá de Antioquia, se tiene un piloto para arreglar vías terciarias, fortalecer las Zonas de Reserva Campesina, formalizar tierra, promover obras PDET, y acompañar a las familias PNIS y de la nueva estrategia de reconversión de economías ilegalizadas.
- Se identificaron los predios rurales de familias campesinas de San José de Apartadó y Mutatá, permitiendo acelerar el proceso de formalización de predios, de manera participativa entre comunidades campesinas y firmantes de paz.
- Se ha apoyado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) regional Urabá en el acceso a la información y análisis de contextos catastrales.
- Se está construyendo un análisis de datos catastrales del departamento del Chocó buscando de esta manera hacer pedagogía con los nuevos mandatarios locales y departamentales, de la importancia del nuevo modelo de intervención que recoja la información catastral con enfoque multipropósito conjuntamente con las comunidades, como instrumento fundamental de ordenamiento territorial integral.
- Con base en información catastral, se elaboró documento técnico para el mejoramiento de la vía terciaria del corregimiento de la Blanquita - Murri en el municipio de Frontino, buscando beneficiar las comunidades étnicas, firmantes, víctimas e instituciones educativas y salud.
- Se está construyendo una propuesta de intervención para el Cañon del Micay, a partir de un análisis catastral con enfoque multipropósito, con el

fin de poder definir en dónde se debe hacer la priorización de las inversiones en vías, salud rural, educación rural, etc.

Economías populares y relacionamiento con sector privado

La Unidad de Implementación ha avanzado en consolidar una estrategia de sostenibilidad de los proyectos productivos financiados por las diferentes entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final de Paz como la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, la Unidad para las Víctimas y el Fondo Colombia en Paz. En ese marco, avanzamos en el registro de productos en la marca de la marca PaISSana, el cual pasó de 51 productos registrados en agosto de 2022 a más de 1.000 productos registrados a la fecha, de los cuales más del 92% son productos procesados con generación de valor agregado, con 6 memorandos de entendimiento firmados con aliados estratégicos del sector público y privado con pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores como almacenes Éxito, entre otros.

En el mismo sentido, nos articulamos con el programa "Canastas de Paz" de la Superintendencia del Subsidio Familiar con la participación en el lanzamiento del programa el 26 de mayo de 2023 en la ciudad de Girardot, Cundinamarca y luego el acompañamiento en los 14 los escenarios regionales de impulso al emprendimiento social y comunitario, del sector artesanal, alimentos frescos y procesados, gastronomía, textil, servicios turísticos y agroindustria; realizado por las Cajas de Compensación Familiar, por iniciativa propia en el marco de la función social para la dinamización de la economía popular, comunitaria y territorial de los emprendimientos de las comunidades campesinas, étnicas, desplazadas, víctimas del conflicto armado, entre otras iniciativas productivas, con la participación de mujeres y jóvenes. En virtud de esta articulación, la Superintendencia del Subsidio Familiar expidió la circular interna 2023 00005 del 02 de junio de 2023 donde se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.

En el marco de esta estrategia, avanzamos con las entidades mencionadas en un proceso de articulación con ECOPETROL para procurar la incidencia en municipios PDET y otros municipios priorizados, mediante la inversión en proyectos productivos, uso de energías renovables y protección ambiental, que procuren brindar atención a las iniciativas de las comunidades de los territorios, en donde pueden concurrir las acciones conjuntas de Ecopetrol y las entidades implementadoras del Acuerdo Final de Paz.

En este sentido, durante el segundo semestre de 2023, se realizaron mesas técnicas de las citadas agencias del Gobierno Nacional y la Vicepresidencia de

Ecopetrol; un aspecto que se consideró en estos ejercicios y se destaca por su significativa importancia es la presencia de empresas que integran el Grupo Ecopetrol (ISA, HOCOL, CENIT, ESENTTIA) en los municipios de nuestro País. Como resultado del trabajo realizado en las mesas técnicas, se cuenta con una matriz consolidada que será puesta a consideración del equipo de ECOPETROL. La información que se registra en la Matriz se destaca la priorización de 17 municipios, incluidos dos (2) municipios del Meta no PDET: Acacias y San Juan de Arama, en los cuales avanzan intervenciones de la Agencia de Reincorporación y Normalización. En total se priorizan 59 proyectos en los 17 municipios que comprenden, además, ocho (8) proyectos subregionales los cuales impactan a otros 55 municipios; por tanto, en total serían 72 municipios.

Desde la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz en coordinación con la Agencia Nacional para la Reincorporación – ARN se viene articulando con el Viceministerio de Turismo para fortalecer a los proyectos productivos del sector turismo bajo la estrategia “Turismo para una cultura de paz” con el propósito de avanzar en la vinculación de emprendimientos turísticos a la cadena de valor ampliada del turismo en los municipios de Nuquí (Chocó), Viotá (Cundinamarca), Manaure (Cesar), San Vicente del Caguán y Florencia en el Caquetá.

La estrategia “Turismo para una Cultura de Paz” tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del turismo en Colombia mediante la generación de escenarios de oportunidades para iniciativas turísticas y de bienes y servicios que hagan parte de la cadena de valor del turismo que dinamicen la economía local, contribuyan a la construcción de una cultura de paz y prioricen el valor de la memoria histórica como un elemento reconstrucción del tejido social y en la experiencia del visitante a los territorios turísticos de paz. A continuación, algunas de las acciones adelantadas por el gobierno Nacional.

En septiembre de 2023 se realizó Encuentro Nacional de Turismo Social en el marco de las Economías Populares con la participación de 8 proyectos en la rueda de negocios “Encuentro Nacional de Turismo Social en el marco de las Economías Populares” en la Universidad Externado. El espacio tuvo como objetivo dar a conocer la oferta de productos con los que cuentan los actores de las economías populares y abrir canales de comercialización; en articulación con el Viceministerio se realizó el taller Aprendizajes, retos y oportunidades para la construcción de una cultura de paz con cuatro proyectos productivos de Caquetá para vincularlos a la estrategia Turismo para una cultura de Paz”. Los proyectos que participaron fueron: Asociación Agropecuaria Esperanza y Paz, Confecciones La Montaña, Asociación de Fortuleños por la Paz – AFPAZ, Fundación Tradso, Asociación para la comercialización de productos de la Paz - Asopropaz - Cerveza La Roja – Bogotá.

En esta misma articulación, se avanza en el posicionamiento y visibilización del sello “Colombia: Destinos de Paz”, el cual hace parte de la estrategia nacional

"Turismo para una Cultura de Paz" del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en las instalaciones de la ARN (el sello permanecerá durante 1 mes). Esto, con la finalidad de fortalecer el relacionamiento interinstitucional y promover la implementación del sello en a las unidades productivas de la población firmante de paz. Bogotá

Finalmente, la Unidad avanza en la construcción de planes de trabajo con el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para superar los problemas de inocuidad de los alimentos y las distintas barreras que han encontrado los proyectos productivos de reincorporados y víctimas. Como resultado, a la fecha se cuenta con más de 500 productos entre bebidas y alimentos frescos y procesados con registro INVIMA, en su mayoría de proyectos ejecutados por población en ruta de reincorporación, víctimas y de los municipios PDET. Esta mejor condición de inocuidad de los productos ha permitido, por ejemplo, que se adelanten conversaciones con la embajada de México para exportar a ese país la marca de cerveza "La Roja" producida artesanalmente por firmantes del Acuerdo de Paz.

Participación política (Punto 2)

Como parte de la estrategia de articulación y coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para el fortalecimiento de las veedurías sociales y organizaciones territoriales, la Unidad de Implementación del Acuerdo viene construyendo un proceso de fortalecimiento de veedurías ciudadanas con enfoque de género. En ese marco, se han adelantado acercamientos con la Red de Mujeres del Catatumbo con el fin de realizar un piloto. Igualmente, la Unidad participa como entidad miembro de la Red Institucional de Apoyo a las Veeduría (RIAV).

En el mismo sentido, se ha articulado con el DAFP y el Secretariado Nacional de la Pastoral Social la formulación y presentación de un proyecto de cooperación a la Embajada de Irlanda, con el objetivo de trabajar con las redes de Consejos Territoriales de Paz en las regiones del Bajo Cauca Antioqueño, Sur del Meta, Pacífico Nariñense y Sur de Córdoba, en el fortalecimiento de sus capacidades en materia de control social y veeduría ciudadana para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de las subregiones priorizadas, y la promoción de estas redes de Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC) como órganos asesores y consultivos de paz con capacidad de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

Igualmente, se ha articulado y coordinado con la Consejería Presidencial para la Juventud y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) un proyecto relacionado con el Programa Nacional de Jóvenes en Paz para poder hacer acciones en beneficio de la juventud colombiana, fortaleciendo sus capacidades y habilidades en liderazgo y participación, teniendo en cuenta el enfoque de

género como una prioridad para el desarrollo de las actividades. Se espera presentar este proyecto al Fondo Multidonante (MPTF).

La Unidad de Implementación participa de manera activa en la Mesa Técnica para la Prevención Temprana y Superación de la Estigmatización, junto con el Consejo Nacional de Reincorporación CNR- Comunes, Unidad Nacional de Protección (UNP), Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, DDHH del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Unidad Técnica de Reincorporación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación.

Consejo Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia (CNPRC)

En el marco del punto 2.2.4 del Acuerdo Final de Paz, estamos apoyando la secretaría técnica del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), la cual ejerce la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), de acuerdo con el Decreto 2647 de 2022.

Fin del conflicto (Punto 3)

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)

De conformidad con la delegación hecha mediante Decreto 0153 del 06 de febrero de 2023, la directora de la Unidad de Implementación ha participado de las sesiones del CNR y el Sistema Nacional de Reincorporación reglamentado mediante Decreto 846 de 2024.

Es preciso resaltar que el CNR permitió la participación de otras formas de expresión política diferentes al Partido Comunes para que hagan parte de la base de organizaciones de expresiones nacionales de carácter político que serán invitadas permanentes a sus sesiones, y son las que se indican a continuación:

- Corporeconciliación
- Peregrinos por la Vida y la Paz
- Comité Nacional de Excombatientes, Lisiados de guerra, Adultos mayores y Enfermedades de alto Costo- ASOCONEAEC
- La Mesa Autónoma de Reincorporación MAR
- Mesa Nacional del Café
- Coordinadora Nacional de Mujeres –CONAMU-

Con la participación de estas nuevas “expresiones políticas” de firmantes, el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, en el cual en nombre del Gobierno Nacional participan la Unidad de Implementación y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), se aprobó la estrategia de sostenibilidad de proyectos productivos, en la cual la sostenibilidad económica, social y ambiental se entiende en el proceso de reincorporación como el camino de generación de condiciones y el fortalecimiento de capacidades para el acceso

a ingresos económicos que posibilitan la vida digna de las personas, por medio del impulso a proyectos productivos y la empleabilidad.

Adicional a esto, se aprobó la nueva estrategia de seguridad alimentaria para los firmantes en proceso de reincorporación con la cual se espera cubrir más del 90% del total de la población. Así mismo, se ha trabajado en la estrategia de empleabilidad, con la cual se espera fomentar la inclusión laboral de los PPR, mediante el acceso efectivo y la permanencia en el mercado laboral a través de iniciativas de apoyo que impulsen la inclusión sin estigmatización.

De igual manera, el CNR se ha enfocado en abordar temas como la participación en este escenario de las distintas expresiones de firmantes, para lo cual se han determinado una serie de criterios para clarificar la participación y representatividad de firmantes en estos escenarios. En ese sentido, se ha logrado mantener la invitación permanente al CNR de delegados(as) de siete (7) organizaciones con amplia presencia territorial, que agrupan parte de la diversidad de procesos de reincorporación que no necesariamente se encuentran articulados a los procesos del partido político Comunes. La participación de dichas organizaciones en la instancia del CNR, además de ampliar la participación desde una perspectiva diversa de lo territorial, nutre la mirada y la incidencia desde el enfoque de los procesos productivos, la perspectiva de mujer y género, y de la población firmante en situación de discapacidad.

Desde el concepto de reincorporación comunitaria se ha trabajado en la consolidación de espacios de reincorporación colectiva en diferentes regiones, diferentes a los antiguos ETCR (AETCR), bajo la denominación de áreas especiales de reincorporación con las cuales se busca tener un enfoque flexible y adaptativo de reincorporación que permita atender las necesidades de los firmantes y sus comunidades en diversos contextos, partiendo del reconocimiento del enfoque colectivo de la reincorporación.

Plan de Emergencia con AETCR en riesgo de seguridad

A través de un trabajo articulado entre la Unidad para la Implementación, el Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, entre otras instituciones, se ha articulado y atendido oportunamente la situación de

Convenio con el Hospital Militar

De acuerdo con las cifras reportadas por la ARN, la UARIV, AICMA y Fuerza Pública, se reportan alrededor de 1.300 firmantes de paz con lesiones de guerra, en condición de discapacidad y/o con enfermedades de alto costo, más de 16 mil miembros de la fuerza pública con heridas ocasionadas en combate, un porcentaje del 5% del total de las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad, cerca de 9000 personas víctimas de minas antipersonal, y más de 25.000 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en condición

de discapacidad. Con el fin de dar cumplimiento al rezago en la atención integral en salud de los y las firmantes del Acuerdo de Paz, la Unidad de Implementación lideró la suscripción del convenio que busca atender firmantes de paz, militares, policía y demás miembros de la fuerza pública con lesiones de guerra, así como a víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad.

Este convenio se firmó entre la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa en representación del Hospital Militar Central.

Casas Refugio Transitorias

En marco de un trabajo articulado con la SAE y ARN, y con el fin de generar escenarios de atención y protección a personas en proceso de reincorporación en riesgo. La Sociedad de Activos Especiales transfirió a título gratuito dos inmuebles a la Agencia de Reincorporación y Normalización para servir como casas transitorias para firmantes en condición de vulnerabilidad y/o amenazas. Estos inmuebles están ubicados en la ciudad de Bogotá y Cali y la Unidad de Implementación fue quien realizó la solicitud de transferencia con base en el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente se adelantan gestiones de tipo administrativo con el fin de articular con los gobiernos locales la puesta en funcionamiento de estos espacios.

Como se mencionó anteriormente, las acciones y estrategias desarrolladas en el marco de la delegación presidencia a la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz en la instancia de Delegada Presidencial ante el SISEP, como Secretaría Técnica de la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y como Representante del Presidente de la República en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, establecida en el Decreto 158 del 7 de febrero de 2023, se informan en la respuesta a la pregunta 7 del presente cuestionario.

Solución al Problema de las Drogas lícitas (Punto 4)

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

En el marco de las acciones de articulación y verificación que realiza la Unidad de Implementación, se ha participado en la Mesa Técnica del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI) creada para hacer seguimiento a la implementación del PNIS. En esta mesa ha participado la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), el Ministerio del Interior, delegados del componente Comunes de la CSIVI, de la IEANPE y de la IEM, y la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

Política de Drogas de Colombia – Política Antidrogas de Estados Unidos

La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz logró la inclusión de cuatro estrategias priorizadas por el Gobierno colombiano en la política antidrogas del Gobierno de Estados Unidos: i) la importancia del Acuerdo y de su implementación; ii) proporcionar elementos conceptuales para la comprensión en lo relacionado con el uso del término coca, toda vez que este hace referencia a un producto terminado que se corresponde con el eslabón más fuerte de la cadena, y lo que se busca con estos aportes es mantener los conceptos de hoja y pasta base de coca para la producción de cocaína, marihuana y amapola, así mismo desvincular a las comunidades como primeras responsables de la cadena del negocio; iii) incluir dentro de los mecanismos de interdicción el fentanilo, aunque no se produce en Colombia es necesario suponer medidas de vigilancia epidemiológica que implican: la notificación de intoxicaciones agudas y la detección de la sustancia con tamizajes en escenarios de riesgo, dado que es común que en el mercado ilegal esta se mezcle con otras drogas sin que el usuario de esta tenga conocimiento de lo que está consumiendo realmente; y, iv) incluir en el componente rural la sustitución voluntaria en el marco del programa de reconversión productiva.

Hambre cero

En el marco del programa Hambre Cero y de la crisis alimentaria en zonas cocaleras, la Unidad de Implementación ha participado en las mesas de trabajo de construcción de este programa que abarcaron los territorios PDET, los 56 municipios del PNIS, y los 145 municipios priorizados en la nueva estrategia de reconversión productiva de economías ilegalizadas (en los cuales se incluyen los municipios PNIS), dando los siguientes lineamientos:

1. En relación con la crisis alimentaria, se propuso que el programa Hambre Cero se implemente de manera rápida y coordinada con otras iniciativas existentes para la atención de la población cocalera en dichos municipios, en especial aquellas medidas vinculadas a la Reforma Rural Integral planteada en el Acuerdo.
2. Incorporar en la construcción de los lineamientos del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (SGPDAA) los enfoques de género.
3. Se ha contribuido en la construcción de los objetivos e indicadores del SGPDAA, en virtud del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tiene previsto el diseño e implementación del Sistema y su política, en la cual se incorpora el programa Hambre Cero como estrategia de superación de la inseguridad alimentaria en el país.
4. Crear un sistema de información geográfico que permita al país y al Gobierno conocer la espacialización del hambre en el país, cómo se cruza con territorios en conflicto y en disputa con los intereses políticos y económicos, y por qué es importante identificarlos y ubicarlos para lograr una política de estado enfocada en la superación del hambre.

Seguridad y protección a los liderazgos del PNIS

La Unidad de Implementación hace parte de la Mesa Territorial de Seguridad instalada por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), escenario que tiene como fin exponer, analizar y tomar decisiones en materia de prevención y protección sobre las condiciones de seguridad que afectan a los liderazgos, organizaciones sociales y comunidades vinculadas con la Política de Sustitución Voluntaria que ejecuta el Gobierno Nacional. En ese marco, participamos en la instalación de esta mesa en la ciudad de Montería para dar atención a las amenazas y riesgos de seguridad de las organizaciones sociales del Sur de Córdoba. Igualmente, se ha articulado con la DSCI acciones de garantías de seguridad y protección a liderazgos PNIS en el departamento de Nariño. El rol de la Unidad de Implementación es asegurarse de dar traslado a la OACP, la UNP, y a la Comisión Nacional de Garantías (CNGS) de los hechos constitutivos de violación a los derechos humanos de las comunidades, con el fin de que se activen las rutas de protección a los casos con riesgos extraordinarios.

Acuerdos sobre las víctimas (Punto 5)

Articulación con entidades nacionales y territoriales

La Unidad de Implementación elaboró y entregó a la UARIV un documento sobre elementos para la articulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en el cual se presentan los lineamientos para la debida articulación de los sistemas y entre los sistemas en pro de avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La Unidad de Implementación está adelantando reuniones de alto nivel con el Ministerio de Salud y Protección Social para revisar e impulsar el cumplimiento de la Ley Marco de Cumplimiento del Acuerdo Final de Paz en temas de apoyo a las sanciones propias de la JEP, misión Médica, convenio con el Hospital Militar para la atención de víctimas con discapacidad, entre otras.

La Unidad de Implementación está liderando junto a la Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) la articulación de tres grandes políticas: i) vivienda y habitat digno para las víctimas; ii) empleo y generación de ingresos, y iii) tierras. A partir de esta articulación se busca que estas tres grandes políticas se integren coherentemente otras acciones y medidas en el marco de la reparación integral y el cumplimiento al principio de integralidad de los derechos de las víctimas. En ese marco, la Unidad de Implementación entregó al DAPRE dos documentos de lineamientos de políticas públicas: i) Vivienda y habitat digno; y, ii) Empleo y generación de ingresos (ver Anexo 2 y 3).

Coordinación con el Sistema Integral de Verdad, Reparación y no Repetición (SIVJNR)

En lo relacionado a **sanciones propias y otras medidas de contribución a la verdad por parte de comparecientes ante la JEP**, la Unidad de Implementación, junto a la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, inició diálogos desde enero de 2023 para articular acciones concretas, en tres niveles. i) Gobierno – JEP, ii) Gobierno – Gobierno y iii) Gobierno y otros Actores interesados.

I) Articulación y coordinación entre el Gobierno nacional y la JEP

La articulación con la Jurisdicción partió de las audiencias preparatorias para conocer las condiciones de oferta del Gobierno Nacional, y así avanzar en la implementación de sanciones propias y otras medidas de contribución a la reparación, convocadas por la JEP en diciembre de 2022 y febrero de 2023. De la misma manera, se sostuvieron varias reuniones con la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Sección con Reconcomiendo de Responsabilidades de la JEP para establecer las necesidades de las partes para avanzar en esta tarea.

Posteriormente, al conocer el diagnóstico preliminar de la oferta presentada por las 23 entidades del Gobierno Nacional, se conformó una mesa técnica con los equipos de la Unidad, Ministerio de Justicia, la Presidencia de la JEP, el Sistema Restaurativo de la misma, con el objetivo de avanzar en la articulación necesaria para preparar la oferta institucional.

El 23 de junio de 2023 se instaló formalmente la **Instancia de Articulación Gobierno – JEP** para las sanciones propias y otras medidas de contribución a la reparación, según lo establecido en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta sesión contó con la participación de directivas de las entidades parte: Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Jurisdicción Especial para la Paz, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Vicepresidencia de la República en representación del Ministerio de la Igualdad, Agencia de Renovación del Territorio, Agencia de Reincorporación y Normalización, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, y Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y tuvo acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

En esta primera sesión de la Instancia, se presentó la propuesta de reglamento del espacio y la ruta de trabajo fue aprobada. En la segunda sesión, realizada el 18 de agosto de 2023, se aprobó el reglamento de la Instancia y se priorizó la articulación de oferta para complementar los proyectos restaurativos liderados por la Jurisdicción, i) Acción Integral Contra Minas – AICMA- en Dabeiba, Frontino y Murindó en Antioquia, ii) Proyecto restaurativo ambiental de Sumapaz, Bogotá y iii) Reserva ecológica indígena Awá en Barbacoas, Nariño.

El trabajo articulado entre la JEP y el Gobierno nacional ha llevado a la identificación de 47 intervenciones potenciales que podrían ser adecuadas para el cumplimiento de las medidas de reparación, las sanciones propias y los TOAR. Asimismo, se ha trabajado en los criterios para la identificación, adecuación y creación de oferta institucional que cumpla con los requisitos y garantías identificadas por la JEP.

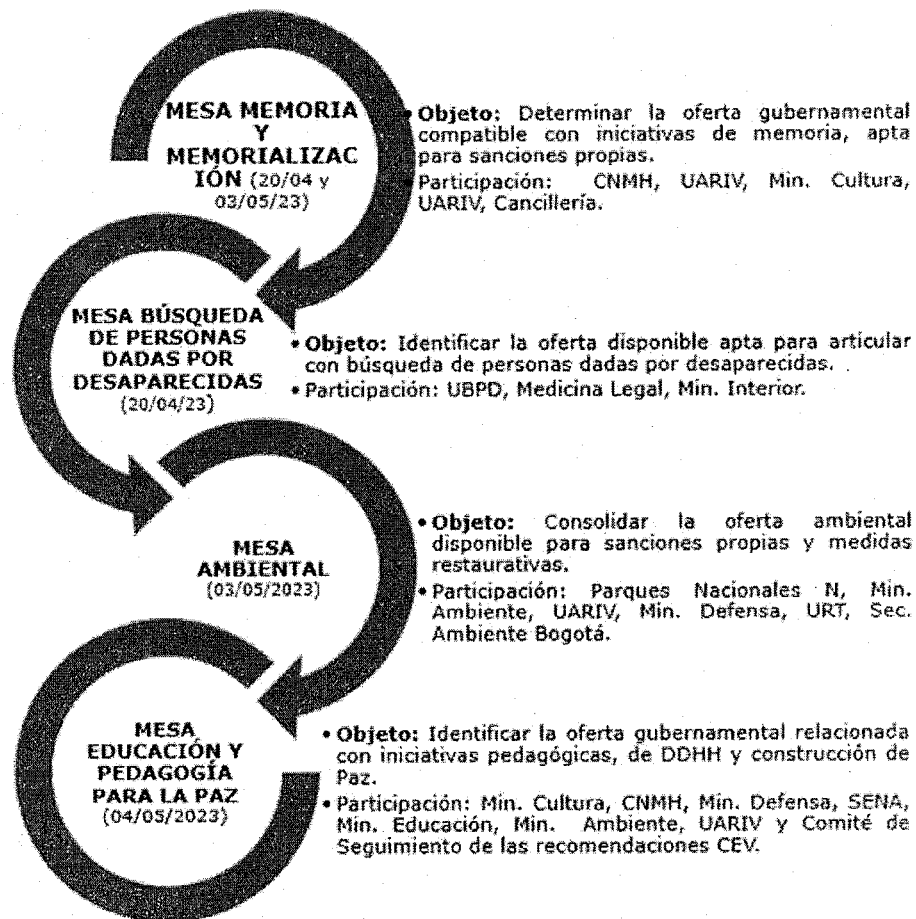
La Unidad de Implementación ha liderado la articulación entre el Gobierno Nacional, así como la Mesa Técnica producto de la Instancia, para avanzar en una ruta de trabajo que responda a las necesidades identificadas por la JEP en estos proyectos restaurativos. De la misma manera, la mesa técnica trabaja en otras tareas delegadas por la Instancia, i) Identificación de necesidades de la Instancia, ii) Sistemas de Información e interoperabilidad y iii) identificación de ofertas generales para la implementación de medidas restaurativas. Esta información se presenta el 4 de diciembre de 2023, en la tercera sesión de la Instancia.

II) Articulación Gobierno - Gobierno

La Unidad de Implementación y el Ministerio de Justicia hemos realizado mesas de trabajo con diferentes entidades del nivel central y con el acompañamiento de la JEP y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con el fin de avanzar en la definición de oferta institucional y superación de cuellos de botella, para la implementación de sanciones propias, TOAR y otras medidas de contribución a la reparación. De los ejes temáticos restaurativos propuestos por la Jurisdicción, se llevaron a cabo: 1 Mesa de Memoria y Memorialización, 1 de Pedagogía y Educación para la Paz y 1 de Ambiente y restauración ambiental. En cuanto a los ejes transversales se realizaron: 2 Mesas de Seguridad Social y Habitabilidad, 2 Mesas de Sistemas de Información y 1 de Seguridad física e integral.

Como resultado de estas mesas, se tuvo un diagnóstico preliminar sobre la oferta disponible para la implementación de sanciones propias y de igual forma, se avanzó en ejercicios pedagógicos sobre lo que involucra llevar a cabo esta implementación, por parte de diferentes actores.

Ilustración 3. Mesas de trabajo Gobierno



Fuente: Elaboración de la UIAP.

Una vez instalada la Instancia de Articulación Gobierno – JEP para la implementación de sanciones propias, hemos continuado realizando mesas de trabajo con las entidades de Gobierno Nacional, con el fin de cumplir con el objetivo de la Instancia.

III) Articulación Gobierno – Actores Interesados

Desde la Unidad de Implementación se han liderado conversaciones con diferentes sectores sociales para la implementación de sanciones propias, al considerar que este tipo de acciones tienen impacto directo en los territorios y las comunidades que los habitan, así como en actores territoriales que tienen capacidad de apoyar estos procesos.

Respecto al trabajo realizado por la **Comisión de la Verdad, su legado y las recomendaciones del informe Final**, la Unidad de Implementación ha tenido un trabajo continuo y articulado con el Comité de Seguimiento y Monitoreo para

avanzar en una estrategia conjunta para implementar las recomendaciones competencia del Gobierno Nacional.

Se busca implementar progresivamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y desde el DAPRE se viene desarrollando un proceso de definición de los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes, según lo establecido en las Bases del PND 2022 - 2026. Esta estrategia se ha trabajado de manera articulada con el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De la misma manera, ya se tiene una selección de recomendaciones del sector Presidencia y cada dependencia o sector avanza en la construcción de una ruta de trabajo que será presentada en diciembre a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Este último avance se realizó en el marco de un Comité al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia, liderado por la Unidad de Implementación y con participación de la OACP, la Unidad de Cumplimiento, la Consejería de Reconciliación, la oficina de Planeación del DAPRE y el DNP, que desde mayo de 2023 viene avanzando en liderar este ejercicio de impulso de las recomendaciones al interior del Gobierno.

El 27 de octubre de 2023 se realizó la primera sesión institucional para la implementación progresiva de estas recomendaciones, donde participaron más de 40 entidades del Estado y desde la Unidad de Implementación, el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Cancillería, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité CEV se realizó un ejercicio pedagógico para posicionar este asunto en la agenda institucional y presentar la propuesta de ruta metodológica con el fin de que las entidades con competencia en la implementación de estas recomendaciones, presentaran una ruta de trabajo para diciembre de 2023.

En el marco de este comité se delimitó el alcance en torno a las recomendaciones sobre las cuales se impulsará su implementación. Asimismo, se estableció una ruta de trabajo y unas orientaciones las cuales se socializaron con las diferentes entidades del Estado colombiano el pasado 27 de octubre, en donde se estableció como compromiso construir un plan de trabajo al finalizar el 2023. Este ejercicio se adelantó en coordinación con el DNP y el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la CEV, creado a partir de la finalización de la misionalidad de la CEV.

Por otro lado, el Comité CEV ha destacado el apoyo a su gestión que ha recibido por parte de la Unidad de Implementación, quien ha liderado diálogos con diferentes sectores para fortalecer el funcionamiento del Comité y "abrazar" su gestión. De tal manera, la Unidad de Implementación y el Comité CEV, están trabajando en unos lineamientos comunes de priorización y selección de

recomendaciones, para hacer proceso pedagógico con sectores del Gobierno nacional. Ello con el acompañamiento del DNP.

Con la **Unidad de búsqueda de Personas dadas por desaparecidas – UBPD-** se ha participado en las sesiones del Consejo Asesor estableciendo prioridades para los planes de búsqueda y articulando la estrategia de cementerios del Ministerio del Interior.

La creación del Sistema Nacional de Búsqueda fue una iniciativa liderada por la UBPD y el Ministerio de Justicia que contó con el acompañamiento de la Unidad de Implementación, cuyo rol será veedor permanente dentro del Sistema, con el fin de que las entidades involucradas cumplan con su nacionalidad que garantice la articulación adecuada para dar con las personas dadas por desaparecidas, su identificación, así como el manejo adecuado de cementerios.

Fondo de víctimas – bienes de las antiguas FARC

En el marco de lo establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 903 de 2017 y del Decreto 0154 del 6 de febrero 2023, la Unidad de Implementación es miembro del Consejo Fiduciario y funge como delegada del DAPRE y ejerce la Secretaría Técnica en dicho Consejo. En el marco del Consejo Fiduciario realizado el pasado 28 de noviembre, asumió por unanimidad, la presidencia la Dra. Gloria Cuartas Montoya.

Implementación, seguimiento y refrendación (Punto 6)

La Unidad de Implementación desde su creación ha impulsado la reactivaron los espacios de articulación con las instancias de participación y seguimiento para habilitar caminos de apertura democrática, y recuperar el rol que se les fue establecido en el Acuerdo, entre estos el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Instancia Especial de Mujeres (IEM) y la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE).

En ese marco, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz está garantizando el funcionamiento de los equipos de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI), Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Instancia Especial de Mujeres (IEM), con una financiación anual de \$7.000 millones de pesos.

Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

Desde el 7 de agosto de 2022 a la fecha se han realizado sesiones de la CSIVI, incluyendo la participación de los garantes y observadores internacionales. Estas sesiones han sido financiadas y garantizadas por el Gobierno Nacional.

Dentro de los resultados de las sesiones de la CSIVI, se resalta:

- La elección de la nueva integrante de la Instancia Especial de Mujeres (IEM) en representación de las mujeres campesinas, que hace parte de la Asociación de Mujeres Afro, indígenas, Campesinas (ASOMAIC).
- La elección de la experta de sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
- El seguimiento a los avances del punto 1 del Acuerdo con participación de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.
- El seguimiento de la sentencia SU-020 en el marco de lo dictaminado por la Corte Constitucional a la CSIVI, mediante un derecho de petición remitido a Instituciones del orden local, regional y nacional con el fin de identificar las acciones que se han realizado con fundamento en la implementación del Acuerdo.
- La participación de la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Instancia Especial de Mujeres (IEM) en sesiones de la CSIVI, y la realización de reuniones periódicas con estas instancias.
- La presentación de la Secretaria Técnica de la CNGS frente al balance y avance de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales.
- La presentación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección frente al balance y avance del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) para población en proceso de reincorporación
- La presentación de los avances en la implementación por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos (DSCI) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), de la Unidad Nacional de Protección.
- La presentación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de sus avances en los compromisos que le corresponden en la implementación del Acuerdo de Paz.
- La presentación Auto 1790 de la Corte Constitucional.
- La presentación de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional ejercida por el CINEP y CERAC.
- El Informe y balance por parte de la directora de la Unidad de Implementación de los avances en la implementación del Acuerdo.
- Instalación de la mesa técnica del PNIS, con metodología y periodicidad, para hacer seguimiento a la implementación del punto 4 del AFP.
- Instalación de la mesa técnica del punto 6 mecanismos de verificación, impulso y refrendación, con el fin de articular acciones para hacer seguimiento a la implementación del AFP.

Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE)

La Unidad de Implementación gestionó y adelantó concertadamente con la IEANPE un proyecto ante Fondo Multidonante para el fortalecimiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos en el seguimiento a la implementación del capítulo étnico del PMI, con un presupuesto aprobado por parte de US\$ 264.976 y una contrapartida de US\$ 61.857 asumida por parte de

la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz. Este proyecto fue aprobado en el mes de julio de 2023, y comenzó ejecución desde el mes de agosto del mismo año.

Instancia Especial de Mujeres (IEM)

El acompañamiento a la IEM en la construcción de un proyecto de sostenibilidad ha permitido la consolidación de un proyecto de financiación que contiene las recomendaciones, en términos de actividades, presupuesto, articulación con las otras instancias del Acuerdo Final de paz y productos. Se espera que de esta articulación y acompañamiento la IEM pueda sostenerse con recursos propios del Gobierno Nacional y no de cooperación internacional.

Se han creado canales de comunicación para que la IEM pueda apoyar para la revisión técnica de los indicadores de género del PMI, así como la necesidad de hacer llegar sus recomendaciones a las entidades encargadas de la Implementación del Acuerdo Final de Paz, también la IEM ha participado de conversaciones entorno a la articulación de las Instancias del Acuerdo Final de Paz, con la finalidad de lograr más impacto en la planificación del trabajo de las 3 instancias.

Emisoras de Paz

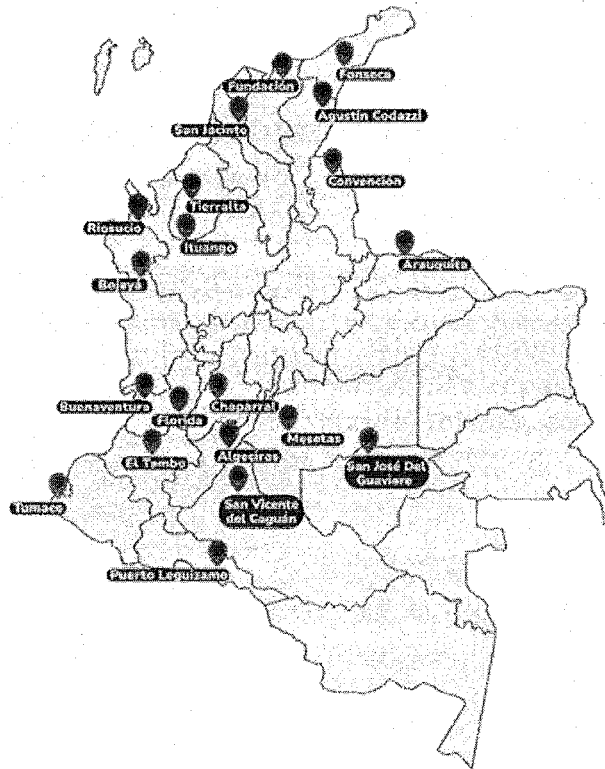
En cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz "Herramientas de difusión y comunicación", en lo que compete a las Emisoras para la convivencia y la reconciliación, conocidas como Emisoras de Paz, durante el periodo del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, el 10 de febrero se inauguraron cuatro emisoras en los siguientes territorios: Fundación (97.3 FM), San Vicente del Caguán (93.3 FM), San José del Guaviare (96.3 FM) y Tumaco (104.6 FM), completando 16 de las 20 pactadas y con las cuales se reporta un cumplimiento del 80% de lo acordado.

Posteriormente, en el marco de la CSIVI se aprobaron los cuatro espacios radiales faltantes para cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de 20 emisoras. Estos cuatro espacios se van a implementar en: Agustín Codazzi (Cesar); Tierra Alta (Córdoba); Riosucio (Choco) y Buenaventura (Valle del Cauca), y por parte del Ministerio de las TIC y el Sistema de Medios Públicos RTVC se realizan las gestiones necesarias para la adecuación e instalación técnica requerida, a fin de garantizar la puesta en marcha de estos espacios radiales en la siguiente vigencia.

Mapa 1. Distribución espacial de las Emisoras de paz

Emisoras de Paz

Radio Nacional de Colombia



Fuente: Elaboración de la UIAP con información de RTVC, 2023.

En el marco del funcionamiento de las Emisoras de Paz, la Unidad de Implementación coordina y articula un escenario de socialización y participación entre la CSIVI y la IEANPE con el Sistema de Medios Públicos, con el fin de conocer el funcionamiento de las Emisoras de paz que permita una articulación de estas con la labor y función de la IEANPE, entendiendo la necesidad de vincular siempre el enfoque étnico y aunar esfuerzos para ampliar la divulgación del Acuerdo de Paz, hacer pedagogía sobre el mismo, comunicar sus avances y lograr desarrollos comunes con las poblaciones en los territorios donde confluyen.

Actualización del Plan Marco de Implementación (PMI):

En el marco del compromiso establecido en el PND 2022-2026, se actualizó el Plan Marco de Implementación (PMI), labor que implicó un trabajo coordinado con las entidades del Gobierno nacional.

Tras más de un año de trabajo conjunto, el 19 de noviembre de 2024, la CSIVI aprobó la actualización del PMI, incorporando 77 nuevos indicadores y ajustando 123 ya existentes. Tal como se menciona en la Adenda del CONPES 3932 de 2017, esta actualización orienta los ejes transformadores hacia la consolidación de la paz, con énfasis en la reforma agraria, la transformación territorial, el cierre de brechas entre el campo y la ciudad y el respeto por las territorialidades rurales, étnicas y campesinas, entre otros aspectos.

Capítulo Étnico

La Unidad de Implementación junto con el Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia de la República, realizó un seguimiento exhaustivo a todos los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) con enfoque étnico en el Sistema de Información para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIIPO), los cuales representan el 19,72% del total de indicadores acordados en este instrumento.

A pesar de la necesidad de contar con fichas técnicas para habilitar el seguimiento de los indicadores, en este período, el SIIPO incorporó en el promedio de avance todos los indicadores que, según su fecha de inicio, requerían registro de avance, incluyendo los clasificados como étnicos. El estado de los indicadores étnicos fue el siguiente:

- 96 indicadores étnicos cuentan con ficha técnica aprobada y cargada en el SIIPO. De estos, 27 se consideran finalizados por vigencia, incluyendo 12 con metas globales cumplidas.
- De los indicadores con ficha técnica aprobada y cargada en el sistema, 92 cuentan con registros de avance.
- 4 indicadores étnicos están en proceso de construcción de fichas técnicas (CE6, CE9, DE9 y DE12).

Además, en lo que respecta a los indicadores con clasificación étnica, la Unidad de Implementación del Acuerdo estableció una Estrategia conjunta de Coordinación, Seguimiento e Impulso Institucional para la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final en colaboración con la Vicepresidencia de la República. Esta iniciativa tiene como objetivos principales:

1. **Priorización Estratégica:** Se ha llevado a cabo una selección de temáticas vinculadas a los puntos del Acuerdo Final de Paz, identificadas a través de informes de diversas entidades, incluyendo el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Kroc, la IEANPE, la Comisión Especial de la Verdad y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Estas temáticas se consideran críticas para la población étnica y requieren un enfoque especial.
2. **Mobilización de Recursos:** La UIAFP busca coordinar esfuerzos interinstitucionales para garantizar que las entidades nacionales cumplan

con sus responsabilidades en el desarrollo del Capítulo Étnico. Además, se pretende facilitar el acceso de las organizaciones étnicas a los recursos del Sistema General de Regalías y orientar a la cooperación internacional para financiar aspectos del Capítulo Étnico con insuficiencia de recursos gubernamentales y locales.

3. **Diálogo y Fortalecimiento de Capacidades:** Este eje se enfoca en establecer comunicación efectiva con los actores territoriales, incluyendo autoridades locales y comunidades étnicas. Busca concretar acciones en los procesos de planificación para avanzar en la implementación de los compromisos del Capítulo Étnico. Además, se trabaja en el fortalecimiento de capacidades de actores clave, como nuevas autoridades y organismos creados por el Acuerdo Final de Paz (IEANPE y MEC), así como organizaciones étnicas

En el marco de la coordinación interinstitucional e intersectorial, se desarrollaron dos fases, la primera de direccionamiento Estratégico desde la Vicepresidencia y la Unidad de Implementación, y segunda, la realización de reuniones bilaterales con entidades competentes en los indicadores del PMI para el Capítulo Étnico. En el marco de la segunda fase, entre el 15 de febrero y el 20 de noviembre de 2023, se han realizado reuniones con 23 entidades encargadas de la implementación del Capítulo Étnico, con el objetivo de identificar aspectos claves relacionados con la implementación. A partir de estas reuniones se ha establecido la línea base de la implementación a diciembre 2022; el presupuesto que cada entidad tiene contemplado para 2023 y para el cuatrienio; las acciones que las entidades tienen contempladas para el 2023 y para el cuatrienio; las articulaciones requeridas para el avance; y el impulsar del relacionamiento entre las entidades y la IEANPE como instancia de participación y órgano asesor de la CSIVI.

Cada una de las entidades responsables del cumplimiento del Capítulo Étnico expusieron los avances registrados en 63 indicadores étnicos y resolvieron dudas de las entidades representantes de los pueblos y comunidades étnicas, así como de los organismos y entidades encargadas del seguimiento de la implementación de las medidas étnicas. Durante las mesas, las entidades también señalaron las dificultades encontradas en la implementación de los indicadores, y algunas propusieron la actualización o mejora de la ficha de medición del indicador. Para abordar esto, se acordaron reuniones con el DNP con el fin de corregir y mejorar estos aspectos.

El 20 de noviembre de 2023, tuvo lugar la firma del Pacto Político por la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz en el marco de la conmemoración de los 7 años de la firma del Acuerdo, en el cual participaron la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República. Durante la ceremonia, se renovó el compromiso para abordar los desafíos pendientes y acelerar la ejecución de

medidas específicas contempladas en el Capítulo Étnico. Este pacto implica la asignación de recursos adecuados, el establecimiento de mecanismos de seguimiento y la promoción de la participación de las comunidades étnicas en las decisiones relacionadas con la implementación.

Enfoque transversal de género

Alta Instancia de género y su Comité Técnico

En el marco de la reactivación y fortalecimiento de la articulación de la Alta Instancia de género y su Comité Técnico, se han realizado distintas sesiones de la instancia.

Igualmente se convocaron espacios de trabajo con el DNP para revisar el trazador presupuestal de paz en el PIIP, evidenciando que muchas de las entidades responsables de implementación aún no reportan oportunamente en esta herramienta. Para superar esta situación, se han desarrollado espacios de asistencia técnica para que las entidades se familiaricen con la herramienta y sepan cómo realizar sus marcaciones. Este tema es fundamental para la rendición de cuentas, pues es un tema del más alto interés para las mujeres y sus organizaciones, la ciudadanía en general, más las instancias de verificación del Acuerdo, entre otros actores.

Articulación para el impulso de los compromisos normativos del Acuerdo Final de Paz:

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tiene a su cargo la función de “articular la implementación de la normativa necesaria para el cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz”^[11]; para ello, se ha apoyado de la gestión que viene adelantando la Unidad de Implementación del Acuerdo Final relacionada con la sensibilización a los sectores del Gobierno nacional respecto de los compromisos normativos pendientes por impulsar y la importancia de adecuar los instrumentos normativos vigentes al espíritu y propósitos del Acuerdo Final de Paz de 2016 en concordancia con la política de Estado “Paz Total” de que trata la Ley 2272 de 2022.

De modo que, la estrategia de coordinación se ha hecho en varias acciones:

1. Identificación de los compromisos normativos del Acuerdo Final de Paz de 2016 pendientes de trámite: Para ello, se identificó mediante una matriz, los compromisos normativos del Acuerdo que serán objeto de trámite en el periodo 2022-2026.
2. Contexto y sensibilización a los sectores de Gobierno: a través de encuentros colectivos y mesas de trabajo por sector. En estos escenarios se ha revisado la normativa expedida conforme a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y lo que está pendiente. Un insumo fundamental

para estas sesiones ha sido el Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 2294 de 2023 y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

3. Reflexiones acerca de los compromisos normativos del Acuerdo Final de Paz pendientes de trámite junto con la estrategia "Del Capitolio al Territorio" liderada por el Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz.
4. Incidencia en los proyectos regulatorios a cargo del Gobierno nacional, que desarrollan compromisos del Acuerdo Final de Paz.

Como se observa, la articulación interinstitucional para implementar el Acuerdo Final de Paz demanda una estructura bastante robusta prevista por el mencionado acuerdo. Sin embargo, la Unidad ha procurado mantener su participación en las distintas instancias para evitar la duplicidad de funciones y acciones que deriven en una intervención difusa en los territorios. Para ello, ha sido de importancia estratégica la puesta en marcha del Gabinete de Paz reglamentado mediante Decreto 717 de 2024.

^[1] Numeral 16 del artículo 23 del Decreto 2647 de 2022.

13 ¿Cómo se pretende devolver el estatus político y la importancia estratégica al SISEP?

A partir de la expedición del Decreto 158 de 2023 por medio del cual se delega a la Directora de la Unidad como delegada presidencial ante la Instancia de Alto Nivel del SISEP, la Unidad logró la activación de las 7 instancias creadas en el Decreto Ley 895 de 2017, las cuales conforman el SISEP, con el fin de contribuir a crear y garantizar una cultura de paz, y por la dignificación del ejercicio de la política y la prevención de cualquier forma de estigmatización y persecución contra la población firmante del Acuerdo Final de Paz.

Para ello se han puesto en marcha las instancias del SISEP y se han creado herramientas de política pública, para garantizar la seguridad de líderes comunitarios y políticos, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

Resaltamos la expedición de la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales que atentan contra la construcción de paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, como también su plan de acción adoptada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 0665 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho. Asimismo, se resalta la priorización de 11 subregiones y 71 municipios para la implementación territorial de la política pública y el plan de acción permanente.

Esta política se convierte en el mayor instrumento para la no repetición de violaciones graves y sistemáticas contra los derechos humanos de su población objeto, y fortalece modelos de investigación criminal frente a las conductas y

organizaciones que atentan contra la participación política de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos.

Además, como un ejercicio único en estos casi ocho años desde la firma del Acuerdo Final de Paz, de manera concertada y participativa se creó y adoptó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), con el cual se contribuye a garantizar la implementación de medidas de prevención, seguridad y protección de la vida e integridad del proceso de reincorporación a la vida civil, cobijando a los miembros del partido Comunes, a sus familias, actividades y sedes, dependiendo de su nivel de riesgo.

En el marco de la seguridad humana integral además se han construido 24 rutas de respuesta inmediata, como herramienta de coordinación interinstitucional para una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo inminente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca al corte del 31 de diciembre. Se destaca las 28 extracciones realizadas desde la creación del Protocolo de evacuación y extracción de emergencia con la que se ha logrado proteger 50 firmantes con sus familias.

Y a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas se ha coordinado, articulado y hecho seguimiento a 312 alertas tempranas. Se han activado rutas institucionales de seguridad, prevención, protección, atención integral a las víctimas y se ha impulsado la investigación judicial con participación de entidades nacionales y territoriales, liderazgos de la sociedad civil, representantes de víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, al corte del 31 de diciembre.

- Reincorporación:

Junto con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se logró la creación y aprobación del Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, que tienen como objetivo generar y fortalecer capacidades en sujetos y colectivos en reincorporación, sus grupos familiares y comunidades, entre otras garantías dentro del principio de seguridad humana.

En este escenario de participación, hemos avanzado en lo siguiente:

- a. Estrategia de sostenibilidad de proyectos productivos.
- b. Estrategia de seguridad alimentaria.
- c. Estrategia de empleabilidad para la inclusión laboral.
- d. Reglamentamos el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, previstos en la Ley 2294 de 2023.
- e. Ruta de consolidación de ETCR.

- f. Impulsamos mesas de acceso a tierra y vivienda.
- g. Apoyamos la coordinación de los traslados de ETCR por riesgos de seguridad.

Por otro lado, se realizó la suscripción del Convenio 056 de 2024 con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y el Fondo Colombia en Paz como administrador de las subcuentas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Unidad de Implementación, con el fin de desarrollar procesos de atención especializada en salud, terapéuticos y pedagógicos de rehabilitación integral y funcional para personas en proceso de reincorporación con discapacidad.

14. ¿Cómo se pretende abordar la política de desmantelamiento de organizaciones criminales?

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) tiene a su cargo la formulación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales y su posterior monitoreo, esto, conforme lo establece el Decreto Ley 154 de 2017 y el reglamento interno.

A partir de esta presión, es importante resaltar que, la Comisión en el año 2024 estructuró y gestionó la adopción de la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales que atentan contra la Construcción de la Paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Este trabajo fue logrado a través de las instancias internas de operación y gobernanza de la Comisión cuya operatividad se ha garantizado a través de la Secretaría Técnica por intermedio de subcomisiones técnicas que han atendido diferentes retos como la redacción de la política, la adopción y la consecución de recursos a través de la cooperación internacional.

Esta política fue adoptada en el Decreto 665 de 2024 y se orienta a contribuir a la no repetición de graves violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección de la CNGS, afectados por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo), así como por el abandono institucional del Estado, mediante acciones integrales que ataquen las múltiples causas (socioeconómicas, políticas, ideológicas, culturales y otras causas estructurales) que favorecen su creación, fortalecimiento y persistencia.

A la fecha la CNGS y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, asesoramos, recomendamos, monitoreamos y verificamos los avances de la política adoptada por el Gobierno nacional mediante el decreto en comento.

15. ¿Qué mecanismo jurídico se ha pensado para el desmantelamiento de organizaciones criminales?

La cabeza de sector responsable de implementar los mecanismos jurídicos de desmantelamiento de organizaciones criminales es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por su parte la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) hace seguimiento y coordinación con el Ministerio del Interior para facilitar varios espacios de retroalimentación con diversos actores frente al marco jurídico.

16. ¿En qué consisten los planes piloto para el desmantelamiento de organizaciones criminales?

El Gobierno de Colombia representado por el señor Presidente de la República y luego por parte del Ministro del Interior, en el año 2024 presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el denominado "Plan de Choque" a través del cual se asumió una metodología de trabajo en la coordinación de la implementación territorial de la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales que atentan contra la Construcción de la Paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, cuyo liderazgo fue asumido por el Ministerio del Interior.

Como expresión política de esta decisión, se diseñó una estrategia de aceleración de implementación de la política para las subregiones de Magdalena Medio y norte del Cauca.

En el municipio de Yondó (Antioquia) se sostuvo una reunión el pasado 21 de marzo en la que el Ministerio del Interior presentó los planes y resultados iniciales del plan de aceleración de la política, en este sentido, esta Unidad considera que es el Ministerio del Interior el sector llamado a dar respuesta de fondo a este interrogante.

17. ¿En qué otros territorios, además del norte del Cauca y el Magdalena medio se tienen priorizados para el desmantelamiento de organizaciones criminales?

En sesión de subcomisión técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad realizada el 4 de febrero de este año, se aprobó la activación inmediata de la política en la Región del Catatumbo con ocasión a la declaratoria de conmoción interior de que trata el Decreto 0062 de 2025.

La Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz junto con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tendremos la responsabilidad de realizar la socialización de la política en la región, sin embargo, insistimos, el Ministerio del Interior es el sector coordinador de la implementación en concreto, por lo tanto, es el llamado a profundizar sobre este interrogante.

18. ¿En qué consiste el Acuerdo Nacional para un Pacto Político?

El Acuerdo Final de Paz, en el punto 3.4.2. establece el Pacto Político Nacional: «El anhelo del país de alcanzar una paz estable y duradera se funda en el reconocimiento de la necesidad de superar el conflicto armado».

En estos términos el Acuerdo señaló: «El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de población LGBTI, de personas en condición de discapacidad, jóvenes, los pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales».

Este Pacto Político Nacional que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno «busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpen en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad».

En este sentido, «el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias». Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia.

Este pacto, en términos del Acuerdo Final de Paz, propende por la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.

Es preciso señalar que, el Pacto se ha promovido en el escenario electoral, de modo que desde esa perspectiva se han celebrado cerca de 63 pactos.

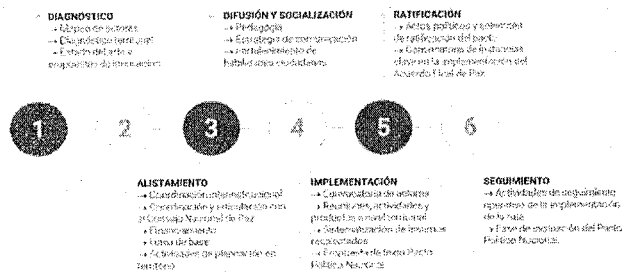
Cumpliendo con el Punto 3.4.2. del Acuerdo Final de Paz y de a orden 5 del Auto 2224 de 2023 de la Corte Constitucional, el Equipo Paz del Ministerio del Interior estableció una ruta para la promoción y suscripción del Pacto Político Nacional

acorde a lo signado en el Acuerdo Final de Paz y con todas las características a saber: desde las regiones y de manera amplia y participativa.

Sin embargo, atendiendo el Auto 2224 de 2023 de la Corte Constitucional debe recomponerse el Pacto, en una visión mucho más amplia y no solo desde lo electoral. Por ello, el Ministerio del Interior propuso un plan de trabajo, tal y como se describe a continuación:



Ruta de planificación y promoción del PPN



A la fecha, la Unidad no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

19. ¿En qué consiste el primer punto sobre seguridad y sacar la violencia del ejercicio de la política del Acuerdo Nacional?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

20. ¿En qué consiste el segundo punto sobre el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-

008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

21. ¿En qué consiste el tercer punto sobre la transformación territorial de los municipios más afectados del Acuerdo Nacional?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

22. En qué consiste el cuarto punto sobre crecimiento económico con equidad y transformación de la economía del Acuerdo Nacional?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

23. ¿En qué consiste el quinto punto sobre el compromiso con el trámite en el Congreso de las reformas sociales del Acuerdo Nacional?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

24. ¿Con qué sectores se ha reunido para alcanzar el Acuerdo Nacional? ¿a qué compromisos o consensos se ha llegado con ellos?

Pese a que el Ministerio del Interior dio traslado de este interrogante a la Consejería Comisionada de Paz, esto es, mediante Oficio 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905), a la fecha, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido convocada por el Ministerio del Interior para socializar el Plan de Acción y la metodología del Pacto Político Nacional de que trata el Acuerdo Final de Paz, razón por la cual, es el ministerio el llamado a responder de fondo este interrogante.

25. ¿Ya se creó la Comisión para agilizar la implementación del Acuerdo Final de Paz? ¿quiénes la integran? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? ¿qué temas va a trabajar la Comisión?

El Acuerdo Final de Paz, no estableció dentro de sus compromisos, la creación de una Comisión para agilizar la implementación. De hecho, a la fecha, esta Unidad no ha sido convocada en ninguna de las instancias del Acuerdo Final de Paz para dialogar acerca de la creación de esta instancia en particular.

El Acuerdo, cuenta con una institucionalidad propia que impulsa permanentemente los compromisos pactados, principalmente a través de:

- a. Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación – CSIVI. Reglamentada a través del Decreto 1995 de 2016, con participación de la parte contratante del Partido Comunes y del Gobierno nacional.
- b. Gabinete de Paz: instancia del más alto nivel, precedida por el señor Presidente de la República de Colombia y reglamentada en el Decreto 717 de 2024.

26. En qué consiste el tablero de control para el seguimiento y control de la ejecución del Plan de Choque? Sírvase indicar su contenido y responsables.

El Plan de Choque es una propuesta construida por el Ministerio del Interior en cuya cabeza estableció que se construiría un tablero de control, tal y como se verifica en el anexo al presente documento. Razón por la cual no podríamos responder a este interrogante.

Sin embargo, en el marco de las funciones asignadas a esta Unidad frente al seguimiento y control a la implementación del Acuerdo Final de Paz, el punto 6.1.5. del Acuerdo dispuso la creación de un *Sistema Integrado de Información* « Con el fin de contribuir a la transparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se

compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos».

De modo que, el Plan Marco de Implementación (PMI) es el mecanismo de seguimiento del Acuerdo Final de Paz, pues retoma los contenidos explícitos del acuerdo y los organiza en el esquema de cadena de valor de las políticas públicas, logrando una desagregación de estos a nivel de punto del Acuerdo Final de Paz, pilares o subpuntos, estrategias, líneas de acción, metas trazadoras, productos, indicadores, cronogramas y responsables.

Es así como, mediante el Decreto 1829 de 2017, se adicionó el Capítulo 7 al Título 1, de la Parte 1, del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 y se creó el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), decreto modificado mediante el nro. 1778 de 2020, norma a través de la cual se estableció que el Departamento Nacional de Planeación, es la entidad que tiene a su cargo la administración, operación, implementación y actualización del SIIPO.

A partir de esta precisión, el porcentaje de implementación concreta y responsables por cada punto del Acuerdo Final de Paz se encuentra publicado en la página [SIIPO v2.0» Sistema Integrado de Información para el Posconflicto \(dnp.gov.co\)](http://dnp.gov.co).

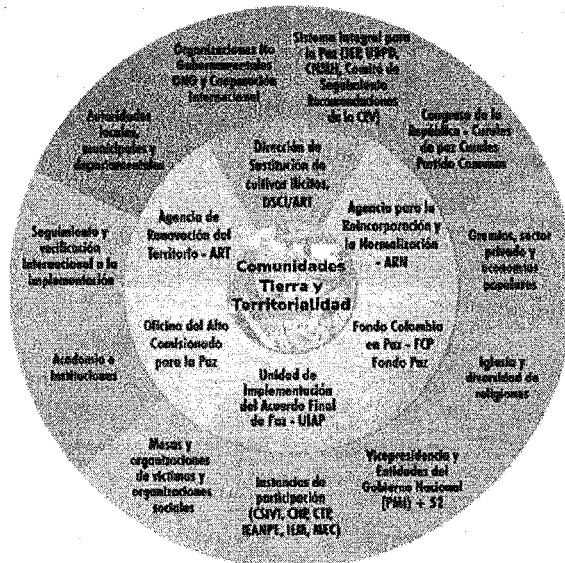
Ahora bien, al respecto de los indicadores rezagados, es preciso señalar que se actualizó el Plan Marco de Implementación (PMI), labor que implicó un trabajo coordinado con las entidades del Gobierno nacional.

Tras más de un año de trabajo conjunto, el 19 de noviembre de 2024, la CSIVI aprobó la actualización del PMI, incorporando 77 nuevos indicadores y ajustando 123 ya existentes. Tal como se menciona en la Adenda del CONPES 3932 de 2017, esta actualización orienta los ejes transformadores hacia la consolidación de la paz, con énfasis en la reforma agraria, la transformación territorial, el cierre de brechas entre el campo y la ciudad y el respeto por las territorialidades rurales, étnicas y campesinas, entre otros aspectos.

27. ¿Con qué otras entidades se articularán para la ejecución del Plan de Choque?

El Plan de Choque propuesto por el Ministerio del Interior, debe articularse con la institucionalidad reconocida por el Acuerdo Final de Paz:

Ilustración 1. Mapa de articulación para la implementación del Acuerdo Final de Paz



Fuente: Elaboración propia UIAP.

No siendo otro el particular, quedamos atentos a resolver cualquier otra inquietud que respecto de la implementación del Acuerdo Final de Paz surja en el funcionamiento de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes.

Cordialmente,

Gloria

GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA

Directora Ejecutiva Presidencial

UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.

Con copia:

- Anderson Guerrero Trujillo - Director Técnico - Dirección de Asuntos Legislativos - Viceministerio General Del Interior - Correo electrónico: asuntoslegislativos@mininterior.gov.co.

- German David Rodriguez Obando – Asesor – Consejería Comisionada de Paz – Cuenta de correo electrónico: germandrodriguez@presidencia.gov.co.
- Angela María Buitrago – Ministra de Justicia y del Derecho – Cuenta de correo electrónico: gestion.documental@minjusticia.gov.co.

Adjunto:

1. Plan de Choque, propuesto por el Ministerio del Interior.
2. Oficio traslado del Ministerio del Interior a la Consejería Comisionada de Paz, nro. 2025-2-003200-008098 del 17 de marzo de 2025 (radicado DAPRE nro. EXT25-00037905).
3. Oficio EXT25-00041404. Traslado Min. Interior a la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz.
4. EXT25-00037905. CUESTIONARIO PROPOSICION 5_20250316190058.

Elaboró:

Carlos Arturo Lozano Sierra
Claudia Marcela Chávez
Sanmiguel
Contratistas
Unidad de Implementación del
Acuerdo Final de Paz

Revisó:

Claudia Marcela Chávez
Sanmiguel
Contratista
Unidad de Implementación del
Acuerdo Final de Paz

Aprobó:

Gloria Isabel Cuartas Montoya
Directora
Unidad de Implementación del
Acuerdo Final de Paz